

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N°009

Medellín, veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el grado jurisdiccional de consulta en favor del trabajador, en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **NORMAN RAMIRO RAMIREZ RODRIGUEZ** contra **CAMPERCROSS REPUESTOS S.A.S.**

ANTECEDENTES

Pretensiones

El demandante solicita que se condene a la sociedad demandada a reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales causadas desde el **15 de julio de 2017** y hasta la fecha de su reintegro, la sanción por despido de una persona en condiciones de debilidad manifiesta y la indexación de las condenas (fl.8).

Hechos

El actor prestó sus servicios a la sociedad **Campercross S.A.S.** entre el **1 de febrero de 2013** y hasta el **15 de julio de 2017**, siendo despedido sin justa causa en esta última fecha, mientras se encontraba en condiciones de debilidad manifiesta derivada de un accidente de tránsito sufrido el **21 de abril de 2017**.

El accidente le dejó como consecuencias un trauma de rodilla, hombro izquierdo y mano derecha, el cual fue manejado con analgesia.

El día **6 de junio de 2017** se le comunicó preaviso, indicándole que su contrato de trabajo no sería renovado.

El día **13 de junio de 2017** se reportó el accidente laboral por parte del empleador, reclamación que fue objetada por la **ARL Positiva Compañía de Seguros S.A.**

Por los anteriores hechos interpuso acción de tutela de la que conoció el **Juzgado Diecinueve Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín**, el cual negó el amparo solicitado.

Esta decisión fue recurrida, correspondiendo la segunda instancia al **Juzgado Diecinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín**, despacho que tuteló los derechos fundamentales del actor de forma transitoria ordenando el reintegro, disponiendo que en el término de 4 meses debía iniciar los trámites para la defensa de sus derechos ante el juez ordinario (fls.11/16).

Contestación Campercross Ltda.

La sociedad demandada a través de apoderada, precisó que el contrato existente entre las partes tuvo vigencia entre el **16 de enero** y el **15 de julio de 2017** y fue terminado por el vencimiento del plazo, siendo comunicado el preaviso desde el **6 de junio de 2017**.

En lo que respecta al accidente laboral señala que del mismo solo se tuvo conocimiento a partir de lo referido por el trabajador, sin que respecto del mismo se aportara pruebas de las condiciones de tiempo modo y lugar y que el reporte del mismo solo se realizó el **24 de mayo de 2017** y fue objetado por la **ARL Positiva S.A.**

En lo que tiene que ver con la acción de tutela informa que es cierto, y que para dar cumplimiento a la orden del juez constitucional citó a su trabajador para que se reintegrara a partir del **7 de noviembre de 2017**, no obstante, su trabajador se hizo presente en esta fecha con abogado indicando que no se iba a reintegrar y exigió el pago de **\$10'000.000** a lo que la empresa se negó, hechos que en su momento fueron informados al juez constitucional.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepción: cesación de amparo constitucional (fls.61/65).

Sentencia de Primera Instancia

El Juez Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **7 de septiembre de 2019**, **absolvió** a la sociedad demandada de las pretensiones en su contra, por no advertir que el demandante para la fecha en que se le comunicó la terminación del contrato a término fijo por expiración del plazo tuviera alguna limitación para el desempeño de sus laboral y en ese orden no

resulta procedente el amparo consagrado en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Esta decisión no fue apelada por ninguna de las partes por lo que al ser completamente desfavorable a los intereses del trabajador fue remitida ante el inmediato superior para que se surtiera el **grado jurisdiccional de consulta**.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado establecido en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, las partes no presentaron alegatos.

Problema Jurídico

El problema jurídico a resolver en esta instancia, será: (i) Determinar si el señor **Norman Ramiro Ramírez Rodríguez** para el **15 de julio de 2017** fecha en que fue terminado su contrato de trabajo se encontraba en condiciones de debilidad manifiesta en razón de su estado de salud que lo hicieran titular de la protección consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

CONSIDERACIONES

Antes de resolver, considera la Sala importante hacer las siguientes precisiones de conformidad con la prueba obrante en el expediente:

1. Entre el señor **Norman Ramiro Ramírez Rodríguez** y **Campercross S.A.S.** se suscribió contrato de trabajo a término fijo inferior a un año entre el 16 de enero y el 16 de julio de 2017 (fl.44).
2. El día **21 de abril de 2017**, fue atendido en la Clínica Soma por contusión en hombro, brazo y rodilla diagnostico que le generó una incapacidad de 15 días (fls.85/87).
3. Producto de estos diagnósticos fue incapacitado durante 15 días hasta el 5 de mayo de 2017 (fl.88).
4. Mediante comunicado del **6 de junio de 2017**, el empleador informó a su trabajador que el contrato suscrito entre las partes no sería renovado (fl.36).

A partir de los anteriores hechos, procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento.

Del estado de debilidad manifiesta como consecuencia del estado de salud

De conformidad con el inciso 2° del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, las personas que se encuentren en situación de *discapacidad* gozan de una protección especial consistente en que su contrato no puede ser terminado sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo.

Esta protección según lo enseñado por la Corte Constitucional en la sentencia C-531 de 2000 se fundamenta en la garantía de los principios de la dignidad humana, solidaridad e igualdad (CP, arts. 2o. y 13), así como los mandatos constitucionales que establecen una protección especial para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (CP, arts. 47 y 54), correspondiendo en consecuencia, al empleador que desee terminar el contrato de trabajo de una persona en condiciones de debilidad manifiesta solicitar autorización ante el Ministerio del Trabajo, so pena de entenderse ineficaz y proceder el pago de la respectiva indemnización sancionatoria.

Para acceder a esta protección el trabajador debe probar que se encuentra en un estado de salud que le impide el desarrollo de sus funciones en condiciones de normalidad, concepto que ha sido denominado por la jurisprudencia constitucional como debilidad manifiesta, y que se explica de la siguiente forma en las sentencias T-302 de 2013 T-692 de 2015, y T-372 de 2017. En la última de las citadas se explicó:

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que los trabajadores que puedan catalogarse como (i) inválidos, (ii) en situación de discapacidad, (iii) disminuidos físicos, síquicos o sensoriales, y (iv) en general todos aquellos que tengan una afectación en su salud que les “impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares”, y que, por sus condiciones particulares, puedan ser discriminados por ese solo hecho, están en circunstancias de debilidad manifiesta y, por tanto, tienen derecho a la “estabilidad laboral reforzada

Bajo esta órbita se sostiene que la *discapacidad* no depende de una calificación previa de la invalidez, sino a la demostración de unas circunstancias objetivas de salud que dificulte el desempeño regular de las funciones del trabajador, circunstancia que por demás debe ser conocida por el empleador, puesto que la protección se deriva de una conducta discriminatoria (sentencias SU-049 de 2017 y SU-040 de 2018).

A esta tesis se ha adherido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que en sentencias como la SL-5181 de 2019 y la SL-2797 de 2020 (sin abandonar su

criterio de que para la protección del trabajador la discapacidad debe ser de grado relevante-entendida la que es igual o superior al 15% de la pérdida de capacidad laboral-) ha indicado que para la materialización de la protección contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no es necesaria una previa calificación de la pérdida de capacidad laboral del trabajador o la expedición de un carné por parte de la EPS, siendo relevante en estos casos el conocimiento de la situación de salud tenga el empleador. A este respecto se refirió el Alto Tribunal en la primera de las sentencias citadas:

...Y tiene toda la razón el sentenciador, pues como lo expuso en sus argumentos, hacer depender la protección reforzada de un dictamen o la expedición de un carné en el que conste formalmente el grado de discapacidad ante la notoriedad de la enfermedad o limitación física, psíquica o sensorial, en el preciso instante en que se quiere finalizar el contrato de trabajo, es imponer obstáculos a los objetivos de la norma, que se repiten, son la integración en los diferentes campos de la vida social, entre ellos, el laboral, y hacer con ello nugatoria la protección, ante la realidad.

(...)

Si se exigiera ello, solo le bastaría al empleador con informarse de determinada discapacidad de su trabajador, y a sabiendas del tiempo que puede tardar una calificación, se anticipa con la decisión de terminar de inmediato el contrato, reconociendo la respectiva indemnización, con lo cual estaría esquivando la restricción legal, haciendo inoperante la protección reforzada, y de paso, con esa interpretación, se estaría poniendo a trabajador y a empleador en una carrera sobre la actuación más rápida para beneficiarse o desconocer en cada caso, la acción afirmativa, algo que resultaría reprochable.

En el caso bajo estudio, solicita el señor **Norman Ramiro Ramírez Rodríguez** que se le aplique la prerrogativa del “*fuero de salud*” toda vez que, para la fecha en que fue terminado su contrato de trabajo se encontraba en condiciones de debilidad manifiesta las cuales eran conocidas por su empleador.

Para demostrar esta condición adjuntó al proceso copia de atención de urgencias recibida el **21 de abril de 2017** en la **Clínica Soma** en la que se le diagnosticó contusión en hombro, brazo y rodilla y se le expidió incapacidad por 15 días hasta el **5 de mayo de 2017**, sin que posterior a esta fecha se observe la expedición de nuevas incapacidades o la existencia de conceptos médicos en los que se hicieran recomendaciones o restricciones ocupacionales derivadas del accidente.

En esa línea se advierte que falta en el presente caso el elemento fundamental para dar aplicación al artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y es la imposibilidad del trabajador de desempeñar su trabajo en condiciones normales, y es que si bien se advierte el actor luego del accidente sufrido debió estar incapacitado durante 15 días, no se aporta prueba de que luego de cumplido este periodo de convalecencia se hubieran expedido nuevas incapacidades o el actor presentara restricciones para desarrollar sus labores.

Es por lo anterior que encuentra la Sala que resulto acertada la decisión absolutoria de primera instancia, motivo por cual se **confirmará** el fallo remitido en consulta.

Costas

Sin costas en esta instancia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

CONFIRMAR la providencia de primera instancia dictada el día **7 de septiembre de 2019**, por el Juez Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **NORMAN RAMIRO RAMIREZ RODRIGUEZ** contra **CAMPERCROSS REPUESTOS S.A.S.**, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

Sin costas en esta instancia.

La anterior decisión se notifica por **ESTADOS**.

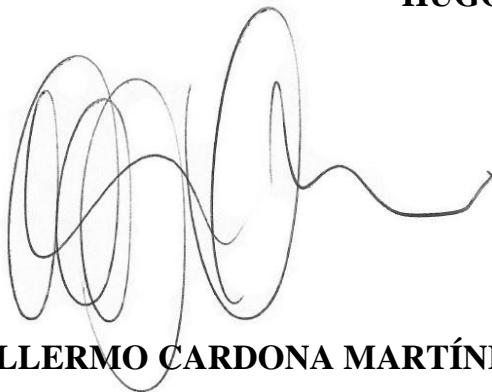
LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ

Certifico: Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS No.015** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín, **01 de febrero de 2021**

Secretario